

Recomendaciones sobre la política

Equilibrio entre los derechos humanos y la seguridad pública

La oportunidad

Esencial para la dignidad personal y el desarrollo del potencial humano, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido internacionalmente que debe ser protegido por ley. Hoy en día, las redes sociales, las aplicaciones móviles y otros servicios en la nube están permitiendo nuevas maneras de acceder, crear y publicar noticias e información. Estos están proporcionando nuevas oportunidades para fomentar la libertad de expresión. Las sociedades se benefician de innumerables maneras, incluyendo una ciudadanía más informada y comprometida, la expansión de oportunidades económicas, y comunidades más conectadas.

El desafío

Cualquier tecnología, incluyendo la nube, puede ser mal utilizada para difundir contenidos ilegales u ofensivos, ya sea en fotos, vídeos, archivos de audio o texto. Esto plantea nuevos problemas para los gobiernos y los ciudadanos en su intento de proteger la libertad de expresión y el derecho a recibir y difundir información, mientras se salvaguarda la seguridad pública y la intimidad personal. A medida que los gobiernos y las comunidades tratan de encontrar el equilibrio adecuado, a la vez que se lucha contra el terrorismo y el extremismo, es importante reconocer que la seguridad pública y la libertad de expresión son valores complementarios que a menudo se refuerzan mutuamente.

Recomendaciones sobre la política

Para servir mejor a sus ciudadanos, los gobiernos deberían adoptar leyes y reglamentos claros que sean interpretados y administrados bajo el estado de derecho. Esto permitirá a los gobiernos salvaguardar la libertad de expresión, proteger la seguridad pública y promover la confianza, creando al mismo tiempo las condiciones que harán posible conseguir los beneficios que la tecnología puede aportar a las sociedades y a las economías.

En particular, los gobiernos deben tener en cuenta los siguientes principios:

Respetar el estado de derecho. En la regulación de los contenidos en línea, los gobiernos deben estar plenamente comprometidos con el estado de derecho. Esto significa la adopción de reglas claras que estén codificadas en estatutos y regulaciones. También significa actuar de forma abierta y transparente de forma que el público comprenda las reglas y cómo se aplican. Por último, significa que las decisiones individuales de ejecución deben estar sujetas a la aprobación y revisión judicial o independiente, permitiendo al mismo tiempo que las empresas e individuos afectados apelen las decisiones tomadas contra ellos.

Proteger la libertad de expresión y el acceso a la información.

Es un papel fundamental y la responsabilidad de los gobiernos proteger la seguridad pública. Esto a veces requiere el acceso a la información digital o la retirada de contenidos en línea. Pero la libertad de expresión no debe ser restringida por los gobiernos, excepto en circunstancias estrictamente definidas basadas en la legislación internacionalmente reconocida. Cuando las restricciones son necesarias, deben ser compatibles con las normas internacionales de los derechos humanos y el estado de derecho, y deben ser proporcionales a la finalidad en cuestión. Los gobiernos deben tener cuidado para asegurar que las leyes que regulan el contenido en línea no impidan a las personas compartir ideas, incluso aquellas que no sean populares.

Respetar los derechos a la privacidad en línea. Los gobiernos llevan tiempo intentando asegurar que las competencias de las autoridades para la seguridad nacional o la vigilancia de ciudadanos para aplicar la ley sean responsables y proporcionadas. Este mismo equilibrio debe reflejarse en las leyes, regulaciones y prácticas relacionadas con la vigilancia en línea. Los gobiernos deben ser transparentes acerca de cómo se promulgan y aplican leyes que rigen

la vigilancia de las actividades en línea. De no hacerlo, podría conducir una gran gama de actividades a otras formas de comunicación, lo que limitaría los beneficios de la computación en la nube para la seguridad pública, el desarrollo humano y el avance económico.

Adoptar un enfoque basado en principios para la regulación de contenidos en línea. En los casos en que los gobiernos requieran que las empresas tecnológicas eliminen contenidos en línea, debería hacerlo de forma transparente y cumpliendo con la legislación que claramente define qué constituye el contenido ilegal y los tipos de servicio que deben ser eliminados. Entre otras cosas, la legislación debe exigir: la eliminación de conformidad con un enfoque de “notificación y eliminación” en lugar de requerir la supervisión proactiva por parte de las empresas de tecnología; los avisos de eliminación de contenido deben ser específicos, estrictamente a medida, y suficientemente detallados para permitir a las empresas identificar con precisión el contenido que debe ser eliminado; que las demandas de eliminación de contenido sean objeto de revisión judicial y apelación. También deben permitir que las compañías de Internet informen al público acerca de las exigencias de eliminación que reciben.

Respetar la soberanía nacional a través de la cooperación internacional. Dada la naturaleza global de Internet, las demandas para eliminar el contenido o revelar la evidencia digital a menudo afectan a los ciudadanos extranjeros y cruza las fronteras internacionales. Si los países actúan de forma unilateral y sin considerar los legítimos intereses soberanos de las naciones, se debilitarán la seguridad pública y el ejercicio de los derechos fundamentales. Los gobiernos deben centrarse en el fortalecimiento de la cooperación internacional y la adhesión a las normas internacionales. Si las normas existentes para la cooperación entre fronteras están obsoletas o son engorrosas, los gobiernos deberían actualizarlas, para que sean apropiadas para la tecnología actual y adecuadas para dar respuesta a los nuevos desafíos.

La no interferencia con las empresas de tecnología. Los servicios en línea donde los usuarios publican contenidos normalmente incluyen condiciones de uso diseñadas para satisfacer los intereses comerciales legítimos del proveedor de servicios, incluyendo la protección de su marca y proporcionar experiencias que sean apropiadas para la naturaleza del servicio y las comunidades a las que sirven. Muchas empresas también tienen procesos que permiten a los usuarios u otras personas informar sobre el contenido que pueda violar las condiciones de uso, y procedimientos para revisar y eliminar el contenido si es necesario. Los gobiernos no deberían presionar a las empresas a cambiar sus condiciones de uso o interferir con la manera en que se hacen cumplir.
